En Marcha

2ª Época | Nº 33 | Marzo de 2020

Boletín Informativo de Falange Española de las JONS

La crisis del coronavirus

La nueva enfermedad va a provocar una gran pérdida de puestos de trabajo y arruinar la economía

No hay tema que haya ocupado más portadas durante el último mes que el coronavirus. Lo que en principio se presentó como una nueva gripe ha derivado en una amenaza mundial de la que España no se encuentra al margen. A pesar de los mensajes optimistas del Gobierno, el problema nunca estuvo controlado y ahora los españoles se encuentran con algo más que un problema de salud pública.

El 8 de marzo marcó un punto de inflexión. No estaría mal que las ministras asistentes a las marchas feministas expliquen por qué llevaban guantes en las manos. ¿Estaban los integrantes del Gobierno informados sobre las novedades referentes al coronavirus? Si es así, ¿por qué fueron cómplices de convocatorias que podían ser un peligroso foco de infección? Mucho nos tememos que, como si de una novela o película distópica se tratase, a los representantes del Gobierno socialpodemita les preocupa poco la vida de sus seguidores y mucho que se mantenga en tensión la agresividad del feminismo que, por ahora, tanto les beneficia. Suspender una de sus grandes citas del año no parece que estuviera en sus planes, desde luego. ¿Qué importa que se contagien unos miles, habrán pensado, si millones recibirán por sus televisores la noticia de que el feminismo es hegemónico y el Gobierno cuenta con un amplio respaldo en la calle?

El postureo del Gobierno puede salir muy caro a los españoles. De momento, todas las noticias referentes al impacto económico son muy preocupantes. El sector servicios, en concreto el turismo y la hostelería, puede arrastrar a la economía española a una nueva crisis que, por otra parte, ya se venía intuyendo desde el último año. Esto nos dejará la duda sobre si el coronavirus es el principal factor que desencadene una nueva racha de destrucción de empleo o si es una tapadera para ocultar una amenaza que ya se cernía en el horizonte.

El postureo del Gobierno nos va a salir muy caro

La farsa del feminismo

Hay que denunciar la mentira de su relato y luchar por la dignidad de todos los seres humanos

"¡La talla 38 me aprieta el chocho!, ¡Fuera rosarios de nuestras aulas!, ¡El machismo es un virus y no el coronavirus!, ¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!"... Los gritos esperpénticos del último 8 de marzo son un buen resumen de esa degeneración occidental que hoy recibe el nombre de feminismo. Bajo la aprobadora mirada de las grandes empresas e instituciones públicas que lo patrocinan, el progresismo al completo (Partido Socialista, Podemos, UGT y CCOO, Sindicato de Estudiantes) formó parte del espectáculo que se ha convertido en habitual cada 8 de marzo. Despojado de su origen en el movimiento obrero (Día de la Mujer Trabajadora se llamaba hasta hace no mucho), hoy conmemora la lucha de sexos que parece interesar a diversos sectores políticos y económicos. La legislación que pretende impulsar Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias y gracias a ello Ministra de Igualdad, es el mejor de los ejemplos: la discriminación del hombre impuesta por el Código Penal puede ser algo muy peligroso que, por otra parte, no ayudará a las mujeres que verdaderamente se encuentren en una situación de desprotección.

Los falangistas llevamos ocho décadas reivindicando la dignidad de los seres humanos, motivo por el cual no consentiremos lecciones de unas alienadas progresistas y sus eunucos comparsas, títeres todos ellos del gran capital. La Justicia ha sido, es y será nuestro norte y para ello llamamos a hombres y mujeres a compartir esfuerzos y responsabilidades. Una nueva España no saldrá de las mezquindades individualistas y los odios de género jaleados por las hordas moradas, sino de la cooperación entre sexos y la fortaleza de las familias que construyan una nación sólida y soberana.

Hay que denunciar las mentiras de su relato. El patriarcado no existe. Lo que sí existe es un modelo económico llamado capitalismo, el cual redistribuye injustamente los medios de producción y busca enfrentar a los trabajadores entre sí con banderas que ensalzan identidades absurdas que buscan sustituir las identidades tradicionales (familia, nación, religión) que pueden suponer un obstáculo a sus deseos de crecimiento económico ilimitado. Y el feminismo es una de esas falsas banderas que no merece más que el mayor de nuestros desprecios.

El Proyecto Celaá

Las reformas educativas siempre con alta carga ideológica y sin consenso parlamentario

La reforma educativa promovida hace años por el Partido Popular contó con numerosas críticas por parte de quienes hoy están en el Gobierno. Le achacaban "carga ideológica" y no contar con el consenso parlamentario. Ahora se habla de otra reforma educativa, esta vez promovida por la ministra Isabel Celaá, pero en esta ocasión no hay ningún debate en los medios y la carga ideológica parece estar presente. Es decir, el Gobierno socialpodemita quiere llevar a cabo una reforma educativa exactamente igual a la del Gobierno popular: con carga ideológica y sin consenso parlamentario. Pero ahora gobiernan los progres, quienes moralmente se consideran por encima del resto de la sociedad, y eso no parece importar.

Podríamos hacer hincapié en que Isabel Celaá, al igual que otros compañeros suyos del Partido Socialista, ha llevado a su descendencia a escuelas que no forman parte del sistema educativo público. No obstante, preferimos señalar que lo publicado hasta ahora es preocupante y no por la hipocresía de quienes lo promueven, quienes llevan a sus hijos a centros privados o concertados mientras se llenan la boca hablando sobre las bondades de la escuela pública, sino porque apuesta por aumentar el número de titulados sin pretender aumentar el nivel de la escuela pública. La futura Ley Celaá, en resumen, apuesta por unos aprobados más fáciles que aumenten la titulitis que padece la sociedad española, repleta de jóvenes con titulaciones académicas que en la práctica sirven de poco. No hay duda que los hijos de la casta socialpodemita, al igual que los hijos de la casta liberal, no tendrán problemas en encontrar empleos tras recibir una buena educación en centros privados o concertados; el problema, como siempre, lo tendrán los hijos de los trabajadores que, afrontando la ausencia de medios económicos, tendrán que acumular titulaciones con las que destacar frente a miles de candidatos con circunstancias similares, es decir, instruidos en una enseñanza pública que si rebaja el nivel verá cómo sus títulos tendrán menos valor y eso repercutirá de modo negativo en sus estudiantes.

La nueva Ley Celaá facilita los aprobados

El Gobierno beneficia a los presos golpistas

España no debe negociar ni ceder ante los secesionistas

El conflicto secesionista ha abandonado la beligerancia por el diálogo. Conscientes de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están dispuestos a considerar sus reivindicaciones, ahora se comportan como personas civilizadas y respetables tanto en las instituciones como en las calles. Y el Gobierno les premia estudiando cómo beneficiarles penalmente con una reforma legislativa.

Nada nuevo, por otra parte. Si la hasta hace poco Ministra de Justicia, y hoy Fiscal General del Estado, definía a los proetarras de Bildu como un partido que se encontraba dentro de los límites de la Constitución, ¿por qué no se va a ver con normalidad que Oriol Junqueras y otros más se vean beneficiados por una política penitenciaria que ya quisieran muchos?

España no debe soportar más a gobiernos que negocian y ceden ante las pretensiones del secesionismo. La nación histórica y el proyecto de futuro debe estar por encima de los intereses y caprichos de las oligarquías regionales y de quienes han convertido el odio a España en su profesión. España, aunque sólo fuera por el más elemental sentido común, no debe seguir tolerando las impertinencias e insultos de los secesionistas. Ningún Estado puede sobrevivir alimentando y dando poder a sus enemigos. Y España, desde 1978, se empeña en aplicar una política suicida con quien pone en duda su existencia.

El Estado no puede dar poder a sus enemigos